



HACIA UN FUTURO DEL TRABAJO QUE APOORTE UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Declaración de la Agrupación Global Unions a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en 2018

Bali, 12-14 de octubre de 2018

Introducción

1. Se vislumbra en el horizonte un mundo del trabajo totalmente diferente, reconfigurado por la automatización, digitalización, el cambio climático y mercados laborales en evolución. Las opciones políticas pueden controlar esas fuerzas y encarrilar el mundo en la dirección del desarrollo sostenible. A corto plazo, se nos presenta un crecimiento económico vacilante y desigual, en medio de crecientes conflictos comerciales. Algunas economías de mercados emergentes han entrado en crisis que están provocando tremendas privaciones a la población de esos países y que podrían desembocar en inestabilidad y pérdidas de empleos en la economía global. La Agrupación Global Unions¹ insta a las IFI a promover políticas para evitar crisis y construir un futuro del trabajo mejor. El trabajo decente puede materializarse mediante creación de empleo, respeto de los derechos fundamentales en el trabajo, salarios vitales y protección social, una reducción de la desigualdad y diálogo social. La presente declaración pide a las IFI que ayuden a evitar crisis financieras provocadas por una regulación insuficiente, el aumento de la deuda soberana, la erosión de la base impositiva y unas economías dispares. Un paradigma del libre comercio que ha venido privilegiando a los inversores por encima de todo ha ocasionado daños generalizados que están alimentando una involución nacionalista. Las IFI deberían ofrecer otra vía de progreso, basada en la justicia, la sostenibilidad y empleos de calidad.

2. La Agrupación Global Unions incluye en esta declaración recomendaciones para remodelar las actividades de las IFI, anticipándose y orientando los cambios en el mundo del trabajo. El FMI puede fomentar e invertir en transiciones justas para los trabajadores y trabajadoras afectados por los cambios climáticos y tecnológicos. El FMI puede respaldar la preparación y adaptabilidad, adoptando un marco estratégico que apoye la protección social universal. La implementación de la salvaguardia laboral del Banco Mundial contribuirá a promover la realización de las normas internacionales del trabajo

¹La Agrupación Global Unions está integrada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), que cuenta con 207 millones de miembros en 163 países; las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI), que representan a sus respectivos sectores a nivel sindical internacional (AIAE, FIP, ICM, IE, IndustriALL, ISP, ITF, UITA y UNI); y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC).

en el desarrollo. El Banco ha de continuar en esta dirección y dejar de lado las propuestas contraproducentes del *Informe sobre el Desarrollo Mundial 2019*, que promueve medidas fallidas de desregulación y una fiscalidad regresiva. La Agrupación Global Unions es favorable a que se preste mayor atención al capital humano, pidiendo que se acompañe de un asesoramiento político que promueva protecciones para los trabajadores/as y la productividad.

Creciente inestabilidad en economías emergentes y en desarrollo

3. El reciente estallido de importantes crisis económicas en dos países del G20 – Argentina y Turquía– confirma la aprehensión manifestada por el FMI en las *Perspectivas de la Economía Mundial* publicadas en abril de 2018 sobre la probabilidad de que economías de mercados emergentes se viesan afectadas por graves tensiones financieras. Ambos países registraron un colapso de su moneda nacional, importantes salidas de capitales y una elevada inflación hasta que, para intentar estabilizar sus economías, los gobiernos adoptaron medidas extraordinarias que, en el caso de Argentina, incluyó la negociación de un acuerdo crediticio por valor de 50.000 millones de USD con el FMI. Análisis de las IFI sobre las causas de estos colapsos se centraron en las repercusiones del endurecimiento de la política monetaria iniciado por EE.UU., y elevados déficits fiscales y comerciales debidos en parte a un prolongado período de caída en los precios de los productos básicos. No obstante, la aplicación de una respuesta política basada en la ortodoxia del FMI, consistente en una subida de los tipos de interés hasta alcanzar niveles históricamente altos y la aplicación de un programa de austeridad fiscal, no ha hecho sino empeorar el estado de la economía argentina desde que recibiera el préstamo del FMI en junio.

4. Otras grandes economías de mercado emergentes, como Brasil, Pakistán y Sudáfrica, afrontan crecientes desafíos a causa de presiones externas, que están ocasionando desaceleración o incluso recesión económica, un incremento del desempleo y mayor inestabilidad que podría afectar a toda la economía mundial. Un importante factor que contribuyó a las crisis en Argentina y Turquía, y que podría extenderse también a otros países, es el hecho de que una parte considerable de la deuda, tanto privada como pública, se haya contraído en divisas extranjeras. En el caso de Argentina, parte de la deuda exterior insostenible proviene de la decisión del gobierno en 2015, de ofrecer compensación a los “fondos buitres” que se habían resistido rechazando los arreglos de restructuración de la deuda propuestos por gobiernos anteriores y aceptados por la gran mayoría de los acreedores. Dichos arreglos se produjeron tras el colapso económico de Argentina en 2001 y el impago de la deuda soberana. Unas tasas de interés más elevadas en Estados Unidos, junto con el estímulo económico aplicado a través de recortes fiscales financiados con el déficit para las empresas y los más ricos, han desembocado en una apreciación del dólar y una mayor carga de la deuda para los prestatarios de economías emergentes.

5. El incremento de la carga de la deuda está además ocasionando importantes obstáculos al crecimiento en países de bajos ingresos. Según análisis del FMI, 16 países subsaharianos, que representan la tercera parte de la región, corren un alto riesgo de encontrarse, o están ya, en situaciones de crisis de endeudamiento. Un importante factor causal es que la mayor parte de la deuda reciente en esos países se contrajo en divisas

extranjeras y a tarifas comerciales, de grandes bancos privados o entidades estatales. Algunos de estos países de bajos ingresos fuertemente endeudados han recurrido recientemente al FMI para solicitar rescates financieros. Dos décadas después de crearse la iniciativa para los Países Pobres muy Endeudados (PPME), una nueva crisis multilateral de la deuda asoma en las regiones en desarrollo, como resultado de prácticas crediticias irresponsables por parte del sector privado financiero y ciertas agencias estatales.

6. Además del endurecimiento de la política monetaria, la salida de capitales y unos niveles de endeudamiento en alza, la guerra comercial entre EE.UU. y varios otros países afectará a numerosas economías. Todo esto tiene lugar sin resolver las preocupaciones legítimas de trabajadores/as y comunidades en esos países respecto a unos acuerdos comerciales que no protegen los derechos de los trabajadores y que conceden un peso desproporcionado a los intereses de los inversores. La Agrupación Global Unions está además sumamente preocupada por el retroceso registrado en algunos países en cuanto a los marcos regulatorios establecidos para proteger frente a los abusos que condujeron a la crisis financiera hace diez años. Recientes ejemplos de prácticas irresponsables y depredadoras por parte de las instituciones financieras vienen a demostrar la necesidad de ampliar y reforzar la regulación del sector financiero a través de la cooperación internacional, en lugar de debilitarla.

Lograr prosperidad compartida y desarrollo en un mundo del trabajo cambiante

7. La edición 2019 del *Informe sobre el Desarrollo Mundial* del Banco Mundial, consagrado al tema de “La naturaleza cambiante del trabajo”, tiene prevista su publicación en octubre. La Agrupación Global Unions se muestra profundamente inquieta por las versiones preliminares del IDM a causa de su fuerte hostilidad hacia los salarios mínimos, la protección del empleo y cualquier otro tipo de regulación laboral. Una de sus principales recomendaciones sería acabar con las contribuciones de las empresas a las pensiones de jubilación y otros tipos de protección social; y asignar todo el peso financiero a los trabajadores y el Estado, con este último financiado en gran parte a través de impuestos al consumo regresivos. Los últimos borradores incluyen ciertas mejoras, pero el IDM sigue adoleciendo de afirmaciones cuestionables que minimizan el impacto de la digitalización sobre la mano de obra global, afirmando que la desigualdad de ingresos está reduciéndose y sosteniendo que la reglamentación de las empresas es la principal causa de informalidad.

8. En algunos casos, las afirmaciones del IDM se contradicen en el informe mismo, por ejemplo cuando muestra que la participación de las rentas del trabajo en los ingresos nacionales han disminuido en la mayoría de los países y que la informalidad no se ha reducido pese a un considerable debilitamiento de la reglamentación de las empresas. El movimiento sindical habría agradecido una contribución seria del Banco Mundial al debate sobre el futuro del trabajo, para ayudar a combatir niveles inaceptables de desigualdad, informalidad y falta de protección social, además de las repercusiones de las nuevas tecnologías y el cambio climático. Lamentablemente, el IDM 2019 no cumple ese propósito.

9. Es hora ya de que el Banco Mundial ponga fin a su asociación con el informe *Doing Business*. El informe promueve una reglamentación atenuada y reducción de impuestos a las empresas, a través de un sistema de clasificación basado en cambios de metodologías y un análisis de los datos que refleje un conjunto restringido de preocupaciones desde el punto de vista de los intereses corporativos. El enfoque de clasificar los países es de por sí excesivamente simplista y no conduce a una seria formulación de políticas democráticas. Desde la introducción de *Doing Business*, inspirado por el “Índice de Libertad Económica” de la Fundación Heritage, el informe ha generado serias críticas tanto internas como externas. Esta burda herramienta de fundamentalismo desregulatorio debería dejar de figurar en la lista de publicaciones del Banco Mundial.

Reconsiderar políticas que aumentan la desigualdad

10. La inestabilidad en distintos países, incluyendo Jordania, Haití, Túnez, Egipto, Sri Lanka, Irán y Nicaragua, ha demostrado una vez más el tremendo impacto de la austeridad impuesta a través de la condicionalidad y el asesoramiento político del FMI. El Fondo necesita realizar un exhaustivo replanteamiento de las medidas de austeridad fiscal que promueve. La Agrupación Global Unions es favorable a una seria utilización de las notas del FMI al personal en relación con la desigualdad económica y de género. Esto incluye la consideración de paquetes de políticas alternativas cuando las políticas recomendadas o requeridas incrementarían la desigualdad. En este contexto, las recomendaciones políticas y la condicionalidad deberían analizarse constantemente para determinar sus impactos distributivos.

11. Investigaciones del personal del FMI han encontrado vínculos entre el debilitamiento de las instituciones del mercado de trabajo y la desigualdad de ingresos. No obstante, el Fondo continúa oponiéndose abiertamente a la restauración de la negociación colectiva sectorial en Grecia y presionando para una mayor flexibilidad laboral. Un panel de expertos establecido en el marco del Memorando de Entendimiento de 2015 recomendó reanudar la negociación colectiva sectorial, suspendida anteriormente por el programa del FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. La postura del FMI contra la negociación colectiva sectorial en Grecia y otros países debería reconsiderarse, en el contexto del enfoque del Fondo en relación con el impacto distributivo y el crecimiento inclusivo. La negociación colectiva sectorial ha demostrado reducir las disparidades salariales, apoyar un crecimiento inclusivo y reforzar la recuperación económica.

12. En el asesoramiento de políticas a nivel de país del FMI figuran frecuentemente recomendaciones de debilitar las regulaciones del mercado de trabajo, como por ejemplo la aportación de salarios mínimos y cierto nivel de seguridad en el empleo, a pesar de contar con pruebas claras de que su debilitamiento contribuye significativamente a una mayor pobreza y desigualdad de ingresos. Un reciente documento de trabajo del FMI (“Desregulación de la protección del empleo y participación de las rentas del trabajo en las economías avanzadas”) encontró una fuerte correlación entre la desregulación del mercado del trabajo y la disminución de la renta del trabajo en los ingresos nacionales desde principios de los 90. La reiterada promoción de un enfoque desregulatorio por parte del Fondo en relación con medidas que protegen los intereses de los trabajadores, contradice directamente su afirmación de apoyar políticas que reviertan la tendencia a una creciente desigualdad de ingresos.

13. Los acuerdos crediticios y el asesoramiento político del FMI han incluido a menudo disposiciones para controlar el gasto social, provocando muchas veces protestas populares contra las recomendaciones del Fondo y sus condiciones crediticias. Tal como confirmara en 2017 un informe de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, el asesoramiento del Fondo sobre gasto social ha estado generalmente motivado por el hecho de dar prioridad a ahorros fiscales a corto plazo, en lugar de asegurar una protección social integral a la población del país. La OEI observó además que este posicionamiento hacía que el Fondo potencialmente estuviese en desacuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 del sistema de la ONU. En respuesta, el FMI inició en enero de 2018 un proceso de revisión de su “visión institucional” sobre la protección social, con el objetivo de elaborar un marco estratégico revisado en 2019. La CSI ha aportado recomendaciones sobre los cambios que el FMI debería aplicar para asegurarse de apoyar la protección social para todos y ha pedido al Fondo que cese de inmediato su oposición a programas en países miembros que proporcionan una cobertura universal, en lugar de cobertura estrechamente focalizada.

Soluciones globales a la fragilidad con inversión pública y empleos de calidad

14. “Fragilidad, conflictos y violencia” constituye un tema prioritario para la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial en su 18ª reposición de recursos (AIF-18). En el marco de la AIF-18 se creó además el Servicio de Financiamiento para el Sector Privado, que permitirá canalizar fondos de la AIF hacia la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), dirigidos al sector privado. Este Servicio se centrará especialmente en Estados frágiles y afectados por conflictos, donde los altos riesgos podrían disuadir de invertir a actores privados e instituciones de financiación para el desarrollo. La Agrupación Global Unions insta al Banco a ejercer cierta cautela en la aplicación del Servicio de Financiamiento para el Sector Privado, particularmente en áreas afectadas por conflictos, donde la reducida capacidad del Estado y otros factores podrían provocar desequilibrios de poder entre las firmas privadas y los Gobiernos. La AIF debería seguir centrándose en inversiones públicas que sienten las bases para la paz y el crecimiento económico. Esto incluye infraestructura, la economía de cuidados, pisos de protección social y el reforzamiento de las instituciones gubernamentales.

15. El trabajo decente reviste una importancia capital en Estados frágiles y afectados por conflictos. Ha de prestarse atención además a la calidad de los puestos de trabajo creados en los sectores público y privado con apoyo del Banco Mundial, y al impacto del asesoramiento político general sobre el trabajo decente. El marco para las situaciones de fragilidad y conflicto del Grupo de Empleo utilizó una “lente de empleos y fragilidad” para examinar explícitamente las implicaciones del asesoramiento político, como la reforma de las empresas estatales.

16. Como punto de partida, las salvaguardias sociales y medioambientales del Banco Mundial deberían aplicarse plenamente en los Estados frágiles y afectados por conflictos, sin ninguna derogación de obligaciones o verificación. El Banco puede tomar medidas adicionales para integrar el trabajo decente en los esfuerzos desplegados respecto a los

temas de fragilidad, conflictos y violencia. El informe final de la AIF-18 identifica “la importancia de verificar que las estrategias de creación de empleo vayan acompañadas de iniciativas que busquen aumentar la calidad de los puestos de trabajo”. El Banco podría realizar mayores esfuerzos para equilibrar el enfoque sobre el sector privado con su apoyo a protecciones laborales efectivas, en línea con el llamamiento incluido en el informe de “orientar el apoyo al sector privado y a los trabajadores en contextos de alto riesgo, en particular, de fragilidad y migración”. Los mismos principios de trabajo decente e inversión privada se aplican a aquellas áreas que reciben refugiados y migrantes. Hace falta que en los países de acogida dispongan de empleos de calidad, rigiéndose por el principio de no discriminación e igualdad de remuneración. No deberían establecerse salarios o condiciones inferiores para los refugiados y migrantes, en línea con el principio de igual salario por trabajo de igual valor.

Invertir en una transición justa apoyada por el diálogo social

17. Los trabajadores y trabajadoras deben tener un sitio en la mesa de negociación para el diseño de las estrategias nacionales sobre energía, diversificación económica y sostenibilidad. Existen serias posibilidades de dejar de lado a trabajadores, comunidades e incluso países, conforme el impacto del cambio climático se multiplica y los países se orientan hacia economías bajas en carbono. La Agrupación Global Unions alienta al Banco Mundial a utilizar el asesoramiento político y las condiciones crediticias para apoyar transiciones justas diseñadas a través del diálogo social, incluyendo grupos de trabajo tripartitos. De esta manera, el Banco puede fomentar una cultura de diálogo social que situaría en mejor posición a Gobiernos e interlocutores sociales para superar otros desafíos, incluyendo la digitalización. El IMF puede ayudar a los países a movilizar recursos para transiciones justas, apoyando la tarificación del carbono.

18. Financiar una transición justa equivale a invertir en el futuro. Por medio de estrategias coordinadas basadas en el diálogo entre las distintas partes interesadas, las comunidades y los trabajadores/as afectados pueden convertirse en impulsores de un nuevo crecimiento económico. No obstante, deben evitarse los errores del pasado. Promesas vagas y mal coordinadas sobre educación y reciclaje profesional no consiguieron evitar el impacto a largo plazo como consecuencia del ajuste estructural y el comercio. Estos enfoques cargan sobre los trabajadores, que se enfrentan ya a un futuro incierto, los costos derivados de tener que adquirir nuevas competencias y hacer frente al desempleo. Para muchos, una espiral descendiente derivó en trabajo mal pagado, subempleo o terminar fuera del mercado laboral.

19. La Agrupación Global Unions insta a un continuo compromiso del Banco Mundial hacia la inversión en energías renovables, infraestructura sostenible, mitigación y adaptación. Unas inversiones para construir los cimientos de una economía baja en carbono pueden estar vinculadas a asesoramiento político sobre transiciones justas integrales. Los sindicatos están dispuestos a colaborar con el Banco con objeto de profundizar el asesoramiento político sobre transición justa, y a discutir el papel de los préstamos en estas transiciones.

Consolidar las normas internacionales del trabajo por medio de las salvaguardias

20. La Agrupación Global Unions aplaude la implementación del nuevo Marco Ambiental y Social adoptado por el Banco, que incluye una salvaguardia laboral en su Norma Ambiental y Social 2 (NAS 2). La salvaguardia laboral está ahora respaldada por una Nota de Orientación que reconoce la importancia que tienen las normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, universalmente aplicables. Resulta imperativo que el Banco coopere estrechamente con la OIT y los sindicatos, que son las partes más informadas sobre las condiciones laborales en sus proyectos y programas. El Banco debería prever un trabajo conjunto respecto a programas de formación, mecanismos de control y procedimientos de consultas para la implementación de la NAS 2. Los sindicatos pueden aportar valiosa información en la fase de diseño de proyectos y deberían estar implicados en la medida de lo posible. El Banco Mundial debería asimismo examinar posibilidades de trabajar conjuntamente con otros BMD que tienen años de experiencia con salvaguardias laborales.

21. En la IFC, desde 2006 el diálogo con los sindicatos ha aportado mejoras en la aplicación de la Norma de Desempeño 2 (ND 2) de la IFC. La implementación de NAS 2 puede extraer lecciones de los numerosos casos laborales relacionados con las salvaguardias de la IFC, incluido el de las aerolíneas colombianas Avianca. Tras varios años investigando el caso Avianca, en relación con la falta de respeto a la libertad sindical, la oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO) de la IFC, recomendó en 2016 que la IFC adoptase procedimientos para la suspensión de pagos a las firmas clientes que no hubiesen cumplido con las acciones a las que se comprometieran para garantizar el cumplimiento de la salvaguardia.

22. Al mismo tiempo, la IFC debería seguir mejorando su diligencia debida y su respuesta frente a posibles problemas. Un reciente informe de la CAO llegó a la conclusión de que la IFC “no había aplicado correctamente” la ND 2, contribuyendo así a la denegación de la libertad sindical para los trabajadores de *Sabah Forest Industries* en Malasia. Sin un sindicato, los trabajadores no tenían voz alguna en relación con reducciones de plantilla, salarios impagos o riesgos de salud y seguridad en el trabajo. La Agrupación Global Unions está asimismo preocupada por una inversión de la IFC en *Minerva Beef*, que ha dado muestras de realizar muy pocos progresos para prevenir el trabajo forzoso y el trabajo infantil en su cadena de suministro paraguaya. Pese a la avalancha de críticas por su inversión en las Academias Internacionales Bridge y su modelo de educación de bajo coste y escasa calidad, la IFC ha continuado apoyando a la compañía. En 2017-2018, Bridge intentó intimidar al sindicato de docentes *Kenya National Union of Teachers*, presentando una demanda por difamación y obteniendo la imposición de una orden mordaza.

Recomendaciones de la Agrupación Global Unions

Medidas para apoyar una prosperidad compartida y el trabajo decente

23. El FMI y el Banco Mundial deberían

- Evaluar el posible efecto de su asesoramiento político, créditos y condicionalidad respecto al nivel y la calidad del empleo y la igualdad económica y de género, y designar paquetes alternativos de políticas cuando fuera necesario. Apoyar una prosperidad compartida y la recuperación de la pérdida de participación de las rentas del trabajo en los ingresos nacionales, promoviendo salarios mínimos vitales, una amplia cobertura de los convenios colectivos y el reforzamiento de las instituciones del mercado de trabajo. Poner fin a la promoción de la desregulación del mercado de trabajo y la supresión de salarios.
- Contribuir a reforzar la capacidad de la administración pública y la inversión pública en servicios de calidad e infraestructura sostenible.
- Utilizar el asesoramiento político y los créditos para apoyar una transición justa para los trabajadores/as y comunidades afectados por la transformación hacia una economía baja en carbono. En este proceso, promover el diálogo social tripartito, la protección social y el trabajo decente.

24. El Banco Mundial debería

- Trabajar conjuntamente con los sindicatos, la OIT y otros bancos multilaterales de desarrollo en la implementación de su salvaguardia laboral (NAS 2) para asegurarse de que las actividades financiadas por el Banco guarden plena conformidad con las normas internacionales del trabajo. Aprovechar el trabajo conjunto para identificar riesgos de violaciones y establecer procedimientos efectivos de control.
- Asegurarse de que la implicación privada en el desarrollo, incluyendo las inversiones y las Asociaciones público-privadas, sea responsable y no ponga en peligro el doble objetivo del Banco o sus salvaguardias, ni perjudique los servicios públicos y los objetivos de desarrollo nacionales.
- Proporcionar asesoramiento sobre el mercado de trabajo que promueva el trabajo decente y que guarde conformidad con las normas internacionales del trabajo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Evitar recomendaciones desregulatorias fallidas que impiden un crecimiento inclusivo y la prosperidad compartida, poniendo fin a la asociación del banco con el informe *Doing Business* y rechazando las propuestas equívocas contenidas en el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2019.

Medidas para una regulación financiera y una fiscalidad efectivas y para superar la crisis

25. El FMI debería

- Asistir a los países emergentes y en desarrollo que atraviesan crisis económicas o una desaceleración provocada por presiones externas como el endurecimiento de la política monetaria, ayudándolos a reducir su dependencia de los préstamos exteriores en lugar de aplicar políticas de austeridad ortodoxas.
- Buscar paquetes de políticas alternativas cuando las condiciones crediticias o las recomendaciones políticas comprometan el trabajo decente o exacerben la desigualdad. Los sindicatos deberían ser consultados sobre estos temas en cuanto al diseño de programas y su supervisión.
- Apoyar la creación de un marco multilateral para la negociación de acuerdos internacionales vinculantes para la restructuración de la deuda cuando los países se enfrenten a una deuda soberana insostenible.
- Adoptar una visión institucional sobre protección social basada en los pisos de protección social y la protección social universal, en lugar de una estrecha focalización. Debería asimismo establecer cómo el FMI podría asegurar una financiación adecuada y previsible de los sistemas de protección social, en lugar de menoscabar el gasto público.
- Apoyar la ampliación y realización de las medidas adoptadas desde 2008 para corregir la falta de regulación del sector financiero, incluyendo los sistemas bancarios en la sombra, los grupos demasiado grandes para quebrar, y la escasa tributación.
- Promover medidas más firmes, incluyendo el intercambio automático de información, para contrarrestar la erosión de la base impositiva, el recurso a paraísos fiscales y la transferencia de beneficios. Apoyar reformas de los sistemas impositivos que se orienten a lograr una base más amplia y una fiscalidad más progresiva.
- Apoyar la introducción de impuestos sobre las transacciones financieras para desalentar el comportamiento especulativo y crear nuevas fuentes de financiación.

10 -09-18